

S.J.C.S.- 222/2024

Se ha recibido en este Servicio Jurídico una solicitud de informe en relación con la modificación del contrato denominado **“VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES DONDE SE UBICAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**.

A la vista de los antecedentes remitidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos, tenemos el honor de emitir el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -

La petición de informe, remitida por correo a este Servicio Jurídico, el día 13 de septiembre de 2024, se acompaña de la siguiente documentación:

- Propuesta de la modificación del contrato.
- Memoria justificativa.
- Trámite de audiencia al contratista aceptando la modificación.
- Propuesta de Orden aprobando la modificación al amparo de los artículos 203 a 206; 191 y 153 todos ellos de la Ley de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017. La modificación no tiene coste económico.

- No se aporta Orden de inicio de la tramitación del expediente de modificación, el contrato, los PCAP y PPTP.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. -

Se plantea la primera modificación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, encontrándonos ante una modificación prevista en el Pliego.

Una vez hecho el inciso anterior, hemos de atender a la Cláusula 2ª del PCAP señala:

“Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado”.

En definitiva, el contrato, así como la modificación objeto de este informe se regirá por lo dispuesto en la Cláusula 1.22 del PCAP, así como por los artículos 203 a 206, 191 y 153 de la LCSP.

SEGUNDA.-

La modificación de los contratos públicos se configura como una facultad de la Administración, limitada normativamente. Por tanto, no es una atribución legal indiscriminada que le permita, a su libre criterio, la novación del contenido de los Pliegos que sirvieron de base a la licitación, sino que se trata de una facultad reglada que solo puede ejercitarse cuando la aparición de nuevas necesidades materiales, no contempladas antes de la perfección del contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio de interés público (dictámenes del Consejo de Estado de 24 de Mayo de 1979 y 28 de noviembre de 1996 y en este mismo sentido el Dictamen de 4 de septiembre de 2003).

Sobre esta cuestión el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 1 de febrero de 2000, recuerda que *"la doctrina científica ha defendido, entre los privilegios de la Administración contratante, la potestad de modificar el contrato -"idus variandi"-, cuando así lo exija el interés público, cuyas exigencias, al servicio de la Comunidad, no pueden quedar constreñidas por las cláusulas del contrato. De esta forma un error inicial de la Administración contratante posteriormente detectado, o un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de contratar, o la adopción de las medidas generales que, aunque no varíen directamente el objeto del contrato, inciden sobre él, permiten la posterior modificación del contrato para adaptarlo a las nuevas exigencias"*.

Además, modificaciones y prórrogas habrán de ajustarse a la tramitación diseñada a tales fines, debiendo todos sus trámites y diferentes fases documentarse adecuadamente.

TERCERA.-

La Cláusula 1.22 del PCAP, se dedica a la modificación del contrato previendo la modificación del contrato si, durante su ejecución, se produjese un aumento o disminución de las sedes objeto del mismo o traslado de las mismas, como consecuencia de reestructuraciones orgánicas u otras circunstancias, y la modificación en los horarios de apertura y cierre, o el número de horas de prestación del servicio en los edificios,

derivados de necesidades organizativas de la Consejería o por variación de los niveles de alerta de seguridad y podrá afectar como máximo a un 20% del precio del contrato, trato por incremento como por disminución.

La modificación proyectada cumple todos los parámetros de la Cláusula 1.22 del Pliego (sin perjuicio de hacer las reservas pertinentes al no haberse remitido los pliegos del contrato).

Asimismo, queda justificado en el expediente, en concreto en la Memoria justificativa, la necesidad de llevar a cabo la modificación.

Por otra parte, se ha cumplimentado la exigencia recogida en el artículo 191.1 de la LCSP, al haberse dado audiencia al contratista y prestado éste su conformidad por escrito de 13 de septiembre de 2024.

No debe recabarse informe al órgano consultivo previsto en el apartado 3 del artículo 191 al no estar incurso la modificación en el Pliego en ninguno de los tres supuestos previstos en dicho apartado.

Se ha cumplimentado, por tanto, lo exigido en el artículo 207.1 de la LCSP.

No obstante, lo anterior, deberá observarse lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3º del artículo 207 de la citada Ley, por lo que habrá de publicarse en el perfil del contratante un anuncio de la modificación acompañado de la documentación prevista en dicho precepto.

Por otra parte, la propuesta de resolución indica de forma separada los hechos y fundamentos de derecho aplicables.

Dicha propuesta de resolución, no hace mención de la garantía definitiva, si bien, no se considera necesario al no modificar el importe del contrato.

Asimismo, deberá prever la cumplimentación de lo dispuesto en el artículo 153 y 203. 3 de la LCSP, es decir, la formalización de la modificación en una adenda al contrato en vigor.

Por último, la propuesta recoge de forma adecuada el pie recurso de dicha propuesta redactándose de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017 y con la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.

Por todo ello se emite la siguiente

CONCLUSIÓN

Se emite el presente **INFORME FAVORABLE** a la propuesta de modificación del contrato denominado **“VIGILANCIA Y SEGURIDAD D ELOS INMUEBLES DONDE SE UBICAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”** en los términos en que ha sido analizada en este informe.

Es cuanto se tiene el honor de informar, no obstante V.I. resolverá.

En Madrid, a fecha de firma.

La Letrada Jefe Adjunta del Servicio Jurídico

en la Consejería de Sanidad

Firmado digitalmente por: BLANCO TORIBIO MARIA DE LAS MERCEDES
Fecha: 2024.09.23 23:41

Fdo.: Mercedes Blanco Toribio

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD